**Proceso Contencioso
Administrativo de
Protección de los
Derechos Humanos.**

Concepto.

Propuesto por la firma forense Jiménez, Molino y Moreno, en representación de **Bayer, S.A.**, para que se declare nula, por ilegal, la resolución DNSV-Nº-02-05 de 26 de agosto de 2005, dictada por el Director Nacional de Sanidad Vegetal del **Ministerio de Desarrollo Agropecuario.**

Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante usted de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 5 de la ley 38 de 2000, con la finalidad de intervenir en interés de la Ley en el proceso contencioso administrativo de protección de los derechos humanos descrito en el margen superior.

I. Las normas que se aducen infringidas y los conceptos de las supuestas violaciones.

A. El numeral 9 del acápite A de la sección denominada "Trámite para obtener un registro comercial de un producto formulado", del título II "Registro Comercial" del resuelto ALP 019-ADM-01 de 22 de febrero de 2001, que establece el procedimiento que debe observar toda persona que desea registrar un plaguicida químico, un agente de control

biológico o un producto microbiológico con posterioridad al cumplimiento de los requisitos y criterios técnicos.

La apoderada judicial de la demandante manifiesta que la norma invocada fue violada de manera directa, por omisión, según se explica en las fojas 34 y 35 del expediente judicial.

B. El artículo 46 de la ley 47 de 9 de julio de 1996 que establece las competencias de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La apoderada judicial de la demandante manifiesta que la norma invocada fue violada de manera directa, por omisión, por las razones explicadas en las fojas 35 a 37 del expediente judicial.

C. El numeral 1 del artículo 8 de la ley 15 de 1977 que establece entre las garantías judiciales, el derecho que tiene toda persona a ser oída en un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La apoderada judicial de la demandante considera que la disposición legal invocada fue violada de manera directa, por omisión, tal como se lee en las fojas 37 y 38 del expediente judicial.

II. Concepto de la Procuraduría de la Administración.

Este Despacho observa que el proceso bajo análisis tuvo su génesis cuando la empresa ALPHA AGRO LIMITED le solicitó a

la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario el registro del plaguicida panazophos 40 EC el 29 de abril de 2005.

Seguidamente, el 1 de julio de 2005, la sociedad BAYER, S.A., presentó recurso de oposición contra el registro del mencionado plaguicida, alegando el uso indebido de los derechos de propiedad industrial.

De acuerdo con las constancias procesales, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario no le dio curso al recurso de oposición propuesto por BAYER, S.A., porque consideró que debía declararse inhibida para conocer dicho recurso fundamentada en el hecho que la sentencia de 14 de octubre de 1991 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia señaló que las oposiciones que guarden relación con marcas de fábrica, marcas de comercio, patentes de invención y denominaciones comerciales son de competencia de los jueces de circuito, ramo civil.

Luego de analizar los argumentos expuestos por las partes, este Despacho considera que a la sociedad BAYER, S.A., se le impidió el acceso a la justicia y la garantía del debido proceso legal, porque la institución demandada se declaró inhibida para conocer el recurso de oposición contra el registro del referido plaguicida, en lugar de aplicar las normas legales y reglamentarias que la facultan para pronunciarse respecto de tales oposiciones.

La opinión de este Despacho se fundamenta en el hecho que la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio

de Desarrollo Agropecuario sí tiene competencia para conocer del recurso de oposición propuesto por la demandante, porque su ley especial la faculta para efectuar el registro de los plaguicidas, restringir, prohibir o revocar dichos registros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 9, el numeral 13 del artículo 10, el numeral 1 del artículo 46, y los artículos 47 y 48 de la ley 47 de 9 de julio de 1996 que no fueron aplicados por la demandada.

También nos fundamentamos en el hecho que una de las normas reglamentarias de la excerpta legal citada, establece la posibilidad que los terceros interesados puedan oponerse al otorgamiento de los registros de plaguicidas, siempre y cuando cumplan con alguno de estos requisitos: 1. se fundamenten en la transgresión a su derecho, o, 2. demuestren con información técnica y científica que existen riesgos inaceptables a la salud y el ambiente, según lo dispuesto en el numeral 9 del acápite A titulado "Plaguicida químico o de un agente de control biológico o producto microbiológico formulado", de la sección denominada "Trámite para obtener un registro comercial de un producto formulado", del título II "Registro Comercial" del resuelto ALP 019-ADM-01 de 22 de febrero de 2001, disposición ésta que no fue aplicada por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. (Cfr. gaceta oficial 24,330 de 25 de junio de 1991).

Al respecto este Despacho observa que en el proceso que se analiza, la demandante cumplió con el primero de los requisitos exigidos en la norma reglamentaria en referencia,

porque fundamentó su recurso de oposición en la transgresión de su derecho subjetivo, tal como se colige del contenido de las resoluciones acusadas. (Cfr. fojas 1 a 6 del expediente judicial).

En virtud de lo expuesto, este Despacho solicita respetuosamente a la Sala Tercera se sirva declarar que ES ILEGAL la resolución DNSV-N°-02-05 de 26 de agosto de 2005, dictada por el Director Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y que como consecuencia de ello, se ordene a la institución demandada dar respuesta al recurso de oposición contra el registro del plaguicida panazophos 40 EC interpuesto por la sociedad Bayer, S.A.

Pruebas: Se aduce el expediente que contiene toda la documentación relacionada con este proceso y que reposa en los archivos de la institución demandada.

Derecho: Se acepta el invocado por la demandante.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Nelson Rojas Avila
Procurador de la Administración, Encargado

Alina Vergara de Chérigo
Secretaria General, Encargada

NRA/5/iv